

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Crónica de la jurisprudencia europea sobre igualdad de género (de 1/9/2011 a 31/8/2012)¹

POR JEAN JACQMAIN.

Profesor Jubilado de la Universidad
Libre de Bruselas

Traducción de José Fernando Lousada Arochena

1

El texto original en francés se publica en *Journal de droit européen*, diciembre de 2012. La crónica comprende sentencias y decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Previamente se acomete un breve análisis de las novedades a nivel legislativo, especialmente interesante porque la única novedad enlaza con la aplicación de una Sentencia del TJUE.



RESUMEN

El estudio aborda el análisis de las sentencias dictadas en aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También incluye sentencias y decisiones emanadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante el periodo objeto de análisis, el autor observa que se mantiene la reducción del número de cuestiones que ya observaba en el periodo anual inmediatamente anterior. Y destaca la progresiva interacción entre ambos Tribunales que abre la cuestión a los actores sociales y profesionales de cómo desarrollar una interacción auténticamente fructífera entre las garantías judiciales de los tres instrumentos europeos de derechos humanos: la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Palabras clave: Tribunal de Justicia de la Unión de Europa. Principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

ABSTRACT

Chronicle of the european case law on gender equality (from 1/9/2011 to 8/31/2012)

The study deals with the analysis of judgments under the principle of equal treatment and opportunities between women and men from the September 1, 2011 until August 31, 2012 by the Court of Justice of the European Union. It also includes statements on the subject issued by the European Court of Human Rights. During the reporting period and according the author, it maintains the reduction in the number of issues already noted in the preceding annual period. And the author highlights the increasing interaction between the two courts that opens the question to stakeholders and professionals how to develop a truly fruitful interaction between the fair trial of the three European human rights instruments: the European Convention on Human Rights, the European Social Charter the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Keywords: Court of Justice of the European Union. Principle of equal treatment and opportunities between women and men.

Los problemas presupuestarios parecen haber paralizado la producción legislativa en el ámbito de la igualdad de género. La única iniciativa a mencionar se refiere a las consecuencias del Caso Test-Achats (STJUE de 1.3.2011, C-236/09, analizada en nuestra anterior crónica de 2010 a 2011, asimismo publicada en esta Revista *Aequalitas*, en el número 29, 2011), que declaró nulo, con efectos 22 de diciembre de 2012, el artículo 5.2 de la Directiva 2004/113/CE, sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios, y su suministro. Con objeto de garantizar la aplicación uniforme en los Estados miembros, la Comisión ha publicado unas “líneas directrices” en su Comunicación de 22 de diciembre de 2011, C (2011) 9497. Podemos estar contentos porque se quieren evitar distorsiones de la competencia, y también aumentos de precios indebidos; y, a los efectos de comprobar que esos fines se consiguen, la Comisión anuncia para 2014 un informe sobre la ejecución de la sentencia. El aspecto negativo es que la prohibición de utilización de factores actuariales sexados se produce solo para nuevos contratos de seguros a partir del 22 de diciembre de 2012, pero no más (ni siquiera a aquellos anteriores con una cláusula de renovación automática), lo cual puede dar lugar a problemas imprevistos. Además, la Comisión imperativamente señala que la prohibición de la utilización de factores actuariales en el ámbito de la Directiva 2004/113/CE, no abarca los regímenes profesionales de la Seguridad Social, que se regulan en la Directiva 2006/54/CE. Bajo una perspectiva de derecho comunitario derivado, no se puede decir lo contrario, pero es que el razonamiento del Tribunal de Justicia en el Caso Test-Achats se basa en última instancia en el principio de la igualdad ya consagrado al máximo nivel en los artículos 21 y 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y por ello la validez de una exención concedida hace 25 años no se puede considerar como fuera de toda duda.

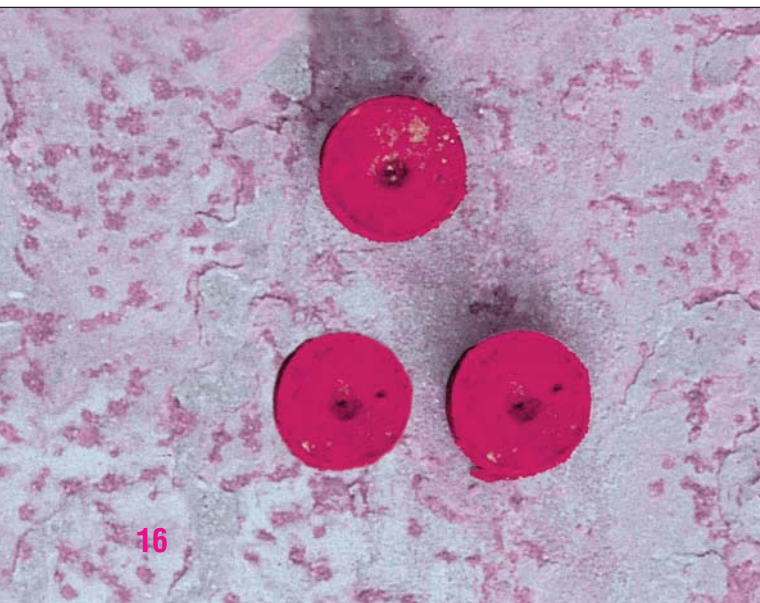
Ya entrando en el análisis de la jurisprudencia recaída en el periodo de 1.9.2011 a 31.8.2012, lo más destacable es que, como en el periodo anual inmediato anterior, sigue siendo escasa. El número de sentencias dictadas es incluso menor que el de cuestiones planteadas debido, en algunos casos, a acontecimientos procesales que han impedido que se dictara sentencia.

1. LA IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN

1.1

Caso Amedee, C-572/10 (sin sentencia).

La manera en que Francia ha ajustado las pensiones de las y los funcionarios públicos a la doctrina de las Sentencias de 29.11.2001, Caso Griesmar, C-366/99, y de 13.12.2001, Caso Mouflin, C-206/00, del TJUE, sigue alimentando controver-





sias. Así, la bonificación por hijos e hijas para el cálculo de las pensiones originó unas cincuenta demandas de hombres ante el Tribunal Administrativo de Saint-Denis de la Reunión (¿por qué allí?). El Tribunal decidió en una de esos litigios consultar al TJUE. Pero se produjo una anulación por el Tribunal Administrativo de Apelación de Burdeos, que devolvió el caso al Tribunal de instancia, el cual decidió no seguir adelante con la cuestión prejudicial. Y el TJUE, mediante orden de 28.3.2012, archivó el caso, cuando ya el Abogado General había presentado sus Conclusiones –en las cuales, por cierto, se rechazaba la existencia de una discriminación sexista indirecta–.

2. LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO

2.1

**Sentencia de 19 abril 2012,
Caso Meister, C-415/10.**

El TJUE aborda la cuestión de la carga de la prueba en el primer caso en la jurisprudencia comunitaria referido a discriminación múltiple –se invocan las Directivas 2006/54/CE (género), 2000/43/CE (origen étnico) y 2000/78/CE (edad)–. La Sra. Meister, que era titular de la cualificación requerida para una vacante en una empresa alemana, vio su candidatura rechazada en dos ocasiones sin entrevista ni explicación. Demandó alegando discriminación por ser mujer, de etnia rusa y por su edad (45 años), y solicitó se requiriese judicialmente a la empresa para entregar la documentación del candidato seleccionado con la finalidad de establecer que estaba mejor calificada que éste. Perdido el juicio y la apelación, la Sra. Meister llegó al Bundesarbeitsgericht (Tribunal Federal de Trabajo), que interrogó al TJUE sobre el alcance de las tres disposiciones idénticas relativas a la carga de la prueba que se encuentran en las tres directivas en cuestión (artículo 8 de la 2000/43/CE, artículo 10 de la 2000/78/CE y artículo 19 de la 2006/54/CE).

El TJUE se remite a la doctrina Kelly que, proveniente de un caso irlandés (STJUE de 21.7.2011, C-104/10, analizada en nuestra anterior crónica de 2010 a 2011), estaba pensada para la Directiva 2006/54/CE y la extiende a las otras dos Directivas: las disposiciones invocadas “no prevén el derecho de un trabajador que alega de forma verosímil que reúne las condiciones enunciadas en un anuncio de contratación y cuya candidatura no ha sido seleccionada de acceder a la información que indica si al término del proceso de selección el empresario ha contratado a otro candidato”.

Sin embargo, la solución final es más matizada que la de Kelly al añadir lo siguiente: “no cabe excluir que una denegación total de acceso a la información por una parte demandada pueda constituir uno de los factores que se deben tener en cuenta en el contexto de la acreditación de los hechos que permiten presumir la existencia de una discriminación directa o indirecta”. Además, el Tribunal de Justicia en sus razonamientos utiliza las consideraciones del Abogado General, P. Mengozzi, de que la actitud de la empresa de abstenerse de llamar a la postulante fue sospechosa, lo que se puede considerar igualmente como otro indicio de una discriminación.

Esto conduce muy oblicuamente a un efecto útil interesante de la norma europea relativa a la carga de la prueba, que se podría reformular de la siguiente manera: la persona que se queja de la discriminación debe establecer los hechos que permitan presumir la existencia siempre que la otra parte no lo impida. Con todo, cabe señalar que en el caso alemán no se ha invocado el impacto de la legislación nacional y europea relativa a la confidencialidad, que fue elemento clave para resolver (o, si se me permite el sarcasmo, casi sería mejor decir “para no resolver”) el caso irlandés.

2.2

**Decisión de 4 octubre 2011,
Méndez Pérez et alii vs. España,
Req. nº 35473/08.**

Mientras la Comisión Europea sigue muy preocupada con el –lento– avance de las mujeres en posiciones de liderazgo en las instituciones públicas y en las empresas privadas de los Estados miembros, nos encontramos con un litigio fuera del ámbito del Derecho de la Unión que ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En un municipio de las Islas Canarias, la lista del Partido Popular había sido excluida de las elecciones porque solo contó con candidatas. Sin embargo, la ley española en materia de igualdad de género (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres) ha insertado en la ley electoral la condición de admisibilidad de que cualquier lista debe incluir al menos el 40% de cada sexo. Frente a este desafío, el Juzgado de lo Contencioso competente interpuso cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de España, que declaró esa normativa impecable.

A consecuencia de esa desestimación, las demandantes se dirigieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inadmite el recurso afirmando que ni la libertad de expresión (artículo 10 del CEDH) ni la de asociación (artículo 11) de las so-



licitantes fue violada, y que el artículo 3 del Protocolo número 1 garantiza la celebración de elecciones libres sólo para el Legislativo, pero no las municipales. Respecto del artículo 14 de la Convención –principio de igualdad–, el TEDH considera, incluso si se combinase esa norma con las disposiciones sustantivas del CEDH, que la norma impugnada trata por igual a mujeres y hombres. Por último, en cuanto al artículo 1 del Protocolo número 12, que prohíbe la discriminación en el disfrute de los derechos protegidos por la legislación nacional, los demandantes lo invocan indebidamente porque el Protocolo entró en vigor para España después de los hechos del caso. El recurso es inadmisibile.

2.3

**Decisión de 10 julio 2012,
Staatkundig Gereformeerde Partij vs. Países Bajos,
Req. nº 58369/10.**

Podríamos hablar de “acciones negativas” en un caso holandés en cierto modo similar al anterior –en cuanto se excluye a un sexo, aunque en este caso es al femenino–, y en el que los Poderes ejecutivo y judicial de los Países Bajos se han remitido al Tribunal Europeo para que indique su deber al órgano legislativo nacional: una formación política guiada por los principios del fundamentalismo protestante prohibió la afiliación de las mujeres (esta posibilidad de exclusión fue abandonada recientemente) y, *a fortiori*, les niega el derecho a presentarse en su nombre a los cargos públicos de elección popular. Dirigidas por una organización feminista, un grupo de organizaciones activistas de derechos humanos llevaron a cabo una acción contra ese partido y contra el Estado con la pretensión de reconocer que la posición del partido era contraria al CEDH, el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos y a la Convención de Nueva York sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y con la pretensión adicional consiguiente de obligar al Estado a actuar para poner fin a esta situación.

La acción contra el partido se desestimó por falta de legitimación activa y, en la acción contra el Estado, la Corte Suprema declaró que la libertad religiosa y la libertad de asociación deben ceder ante el principio de igualdad de género declarada por instrumentos internacionales. Pero como los tribunales carecen de poder para imponer obligaciones al Legislativo, la Ley se mantuvo sin cambios, de modo que resultaba imposible privar al partido del derecho a las ayudas públicas o de participar en las elecciones.

Sin embargo, el partido presentó ante el TEDH una petición en la que explicó que la decisión del órgano jurisdiccional nacional era una violación de los artículos 9, 10 y 11 del CEDH. El Tribunal constata que su propia jurisprudencia viene considerando la igualdad de género como un derecho fundamental, y, en consecuencia, apoya el razonamiento de la corte neerlandesa, citando al efecto el artículo 3 del Protocolo nº 1 en combinación con el artículo 14 del CEDH. El recurso es así inadmisibile.

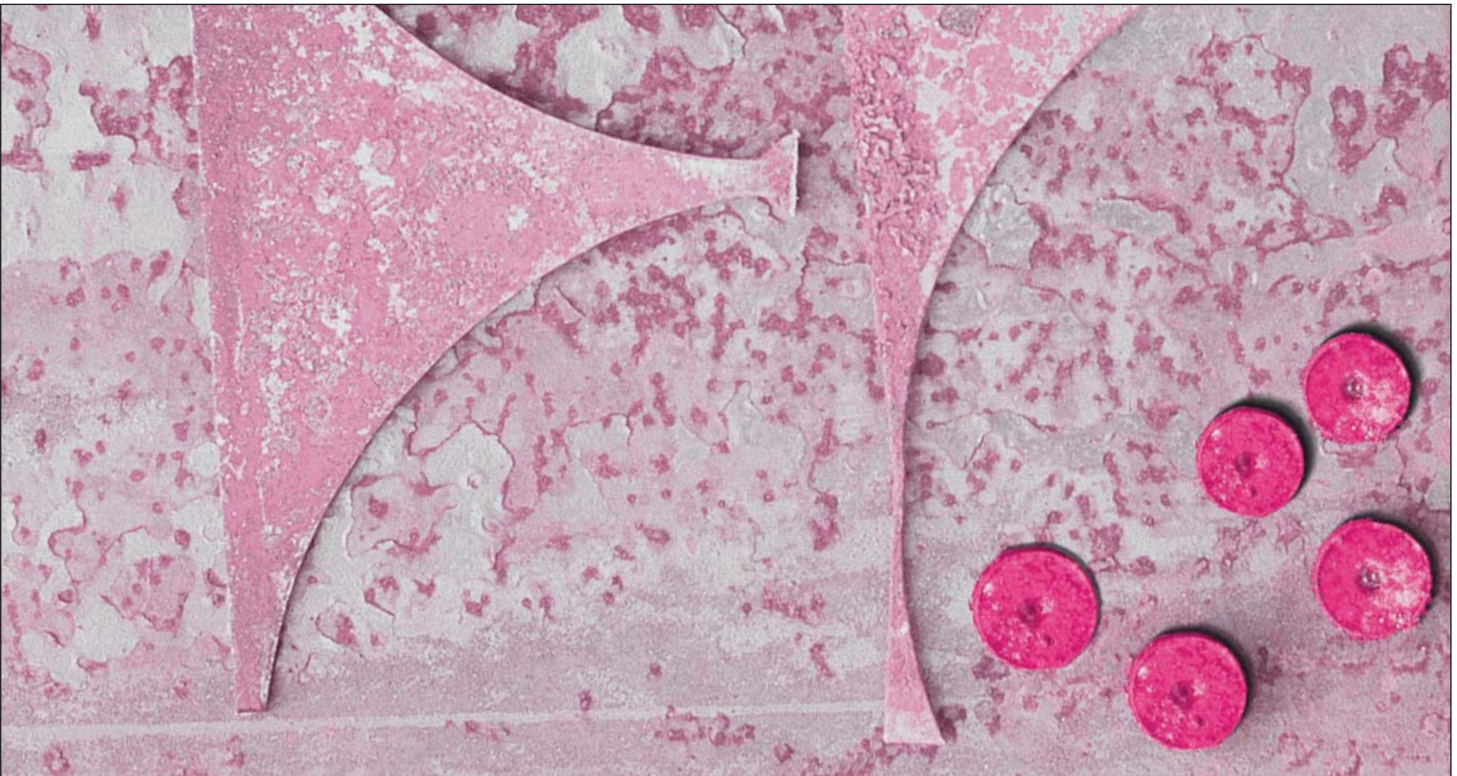
3. LA IGUALDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

3.1

**Sentencia de 20 de octubre de 2011,
Caso Brachner, C-123/10.**

En Austria rige un sistema particularmente complejo de actualización anual (revalorización) de las pensiones que establece, en el año 2008, un incremento menos ventajoso para un determinado grupo de pensionistas con pensiones mínimas que para otros grupos a los cuales se les aplica un incremento extraordinario. Tal diferencia se cuestionó en un proceso en el que el Oberster Gerichtshof (Corte Suprema de Justicia de Austria) consultó al Tribunal de Justicia. La respuesta de este último no es en absoluto inesperada: el elemento en cuestión es parte de la seguridad social obligatoria y el artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE prohíbe la discriminación de género para la seguridad social obligatoria. A partir de esa respuesta, se concluye que “una disposición nacional que implique excluir de un incremento extraordinario de las pensiones a un porcentaje considerablemente más elevado de mujeres pensionistas que de hombres pensionistas puede ser discriminatoria”, sin que dicha desventaja pueda justificarse “por el hecho de que las mujeres que han trabajado accedan antes a la pensión de jubilación, que perciban su pensión durante más tiempo ni que el nivel de referencia a efectos del suplemento compensatorio también se haya elevado extraordinariamente para el 2008”.

Obsérvese, como crítica, que tanto para el tribunal nacional como para el TJUE la realidad de la discriminación indirecta obliga a utilizar datos estadísticos que confirmen que una disposición afecta desventajosamente a un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres. Por lo tanto la Corte mantiene su jurisprudencia tradicional, todavía recordaba recientemente en el Caso Gómez-Limón (STJUE de 16.7.2009, C-357/07).



Sin embargo, el artículo 2.1.b) de la Directiva 2006/54/CE –directiva refundidora de otras sobre igualdad de género, aunque no de la 79/7/CEE– define la discriminación indirecta como una situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, sin exigir ningún tipo de evidencia estadística. Y recordamos que este nuevo enfoque fue introducido en la Directiva 76/207/CEE por la 2002/73/CE porque Parlamento y Comisión renunciaron explícitamente a la interpretación desarrollada en el ámbito de la igualdad de género por el Tribunal de Justicia, a favor de la que se había desarrollado –definiendo el concepto de discriminación indirecta– en el ámbito de la libre circulación (especialmente véase la STJUE de 23.5.1996, Caso O’Flynn, C-237/94).

Lo que sugiere que el Tribunal de Justicia –por razones que se calla– no acepta la intervención legislativa, y ello hace renacer la crítica doctrinal acerca del carácter incompleto de la refundición efectuada en la 2006/54.

3.2

**Decisión de 10 abril 2012,
S.V. Richardson vs. Reino Unido, Req. n° 26252/08.**

En 1995 el Reino Unido modificó su legislación en materia de pensiones: según un calendario gradual, la edad de jubilación de las mujeres pasa de 60 a 65 años, edad desde hace mucho tiempo aplicada a los

hombres. ¿Puede una mujer que se vería afectada en el futuro por esta reforma cuestionarla? Si la cuestión se hubiese planteado como prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habríamos estado ante una ocasión perfecta para examinar el procedimiento y los efectos de la renuncia de un Estado miembro a mantener edades de jubilación diferentes según el sexo (lo que permite el artículo 7.1.a) de la Directiva 79/7/CEE).

Tal cuestión adonde llegó fue al Tribunal de Estrasburgo. Como apreciación inicial, nos deja perplejos leer que el Reino Unido no ha planteado una excepción de inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos en derecho interno: “the applicant would have been unable to bring an effective legal challenge to the provisions of the Pensions Act 1995 in the domestic courts at the time it was passed”, como si el Derecho de la Unión Europea no ofreciese ninguna posibilidad en este sentido.

El Tribunal resuelve con una decisión de inadmisibilidad. Con relación a la invocación del artículo 1 del Protocolo Primero, nos recuerda la doctrina de la Sentencia de 12 abril 2006, *Stec y otros vs. Reino Unido* (Reqs. n° 65731/01 y n° 65900/01), según la cual no es posible demandar por un beneficio futuro. Y además el Tribunal considera que la histórica diferencia entre los sexos en orden a la edad para acceder a la jubilación ya no está justificada. Con relación a la invocación del artículo 14 del CEDH, el objeto de la legislación en cuestión lo hace inherentemente inutilizable.



4. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

4.1

**Sentencia de 17 julio 2012,
B.G. vs. Mediador europeo, F-54/11.**

Se trata de una Sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea –es decir, no se resuelve una cuestión prejudicial–. Por falsificar las tarjetas de tratamiento con la finalidad de acceder a una vivienda social en Francia, una funcionaria fue destituida sin pérdida de los derechos de pensión porque su falta atentaba gravemente a la dignidad de su función.

El Tribunal de la Función Pública rechaza su demanda y, en concreto, rechaza la existencia de vulneración del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Aunque admite que ese principio, consagrado en el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y puesto en práctica para el empleo por la Directiva 2006/54/CE, se aplica al personal de instituciones europeas, niega que en el caso se haya vulnerado.

Acerca de las normas de protección de la maternidad recogidas en la Directiva 92/85/CEE, asimismo se afirma que las debe respetar la Unión Europea. Sin embargo, el artículo 10 de la Directiva permite el despido por razones totalmente ajenas con el embarazo, como así ocurre en este caso.

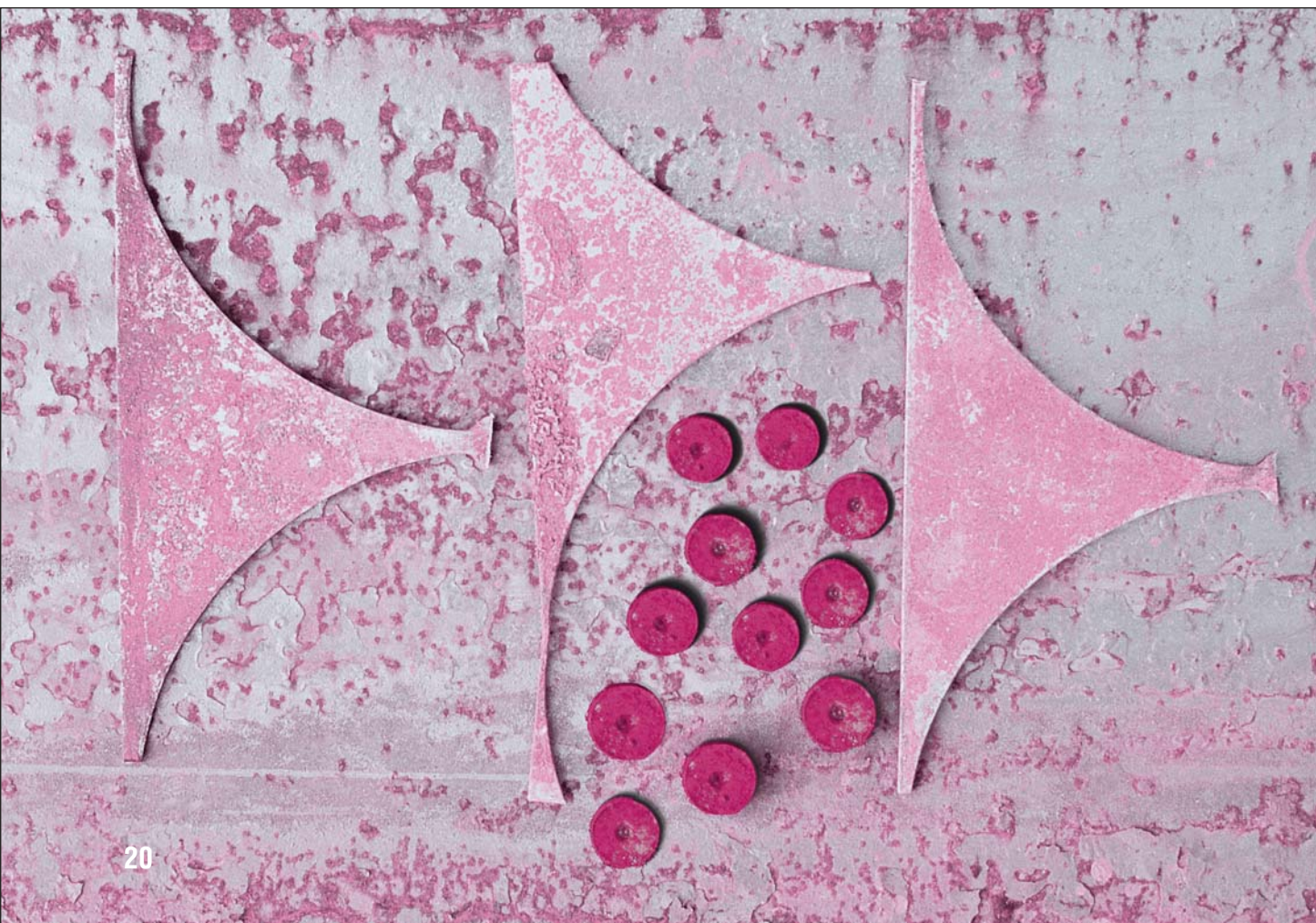
En fin, asimismo se han respetado los deberes de cuidado y buena administración, ya que, siguiendo el consejo del médico de la institución en relación con el frágil estado de salud de la solicitante, la autoridad competente pospuso el procedimiento disciplinario hasta después del parto.

5. EL PERMISO PARENTAL

5.1

**Sentencia de 22 marzo 2012,
Markin vs. Rusia, Req. n° 30078/06.**

Hace dos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dicho que, al limitar la titularidad de un permiso parental en el ámbito de sus fuerzas armadas a las mujeres, Rusia violó el artículo 8 del CEDH en relación con el artículo 14 (Sentencia de 7 octubre 2010, Markin vs. Rusia, Req. n° 30078/06). Frente a esta Sentencia, Rusia solicitó la remisión del asunto ante la Gran Sala del Tribunal Europeo, que ha confirmado la primera sentencia en su totalidad. La Gran Sala examina en primer lugar, como factores contextuales, las directivas europeas sobre el permiso parental (la antigua 96/34/CE y la nueva 2010/18/EU), y dos Sentencias del Tribunal de Luxemburgo relativas al reparto de responsabilidades familiares entre el padre y la madre: Griesmar





(STJUE de 29.11.2001, C-366/99), y Roca Álvarez (STJUE de 30.9.2010, C-104/09, analizado en nuestra anterior crónica de 2010 a 2011). Hecha esta aproximación, la Corte confirma que, si bien el artículo 8 del CEDH no exige la regulación de un permiso parental, en cuanto éste contribuye a la calidad de la vida familiar entra dentro del ámbito de la disposición. En cuanto al artículo 14, el Tribunal confirma que el padre y la madre están en relación con el permiso parental en situaciones comparables, rechazándose los argumentos expuestos por Rusia para justificar la diferencia de trato: la invocación de una acción positiva para las mujeres es desacertada porque, por el contrario, la norma impugnada se basa en estereotipos acerca de la distribución de roles en la familia; y en cuanto al argumento de que la concesión del permiso parental a los hombres socavaría la eficacia operativa de las fuerzas armadas, se encuentra falto de toda demostración.

6. ACCESO A BIENES Y SERVICIOS

6.1

**Sentencia de 27 de septiembre de 2011,
Bah vs. Reino Unido (Req. n° 56328/07).**

Sin jurisprudencia nueva del Tribunal de Luxemburgo sobre la Directiva 2004/113/CE, evocamos aquí un asunto del Tribunal de Estrasburgo, una oportunidad perdida para poner a prueba dicha Directiva.

Originaria de Sierra Leona, una mujer solicitó sin éxito asilo en Gran Bretaña, aunque obtuvo permiso de residencia ilimitado. Solicitó entonces traer a su hijo, de unos diez años, a quien también se autorizó a quedarse, aunque bajo la condición de “control de inmigración”, lo que significaba que no podría acceder a ayudas públicas. Por esta razón, la madre no gozó de una prioridad en el acceso a una vivienda social que se reconocía a toda persona involuntariamente privada de la vivienda y con un hijo a cargo. Ante la decisión negativa de la autoridad competente nacional, la solicitante presentó un recurso ante el Tribunal Europeo invocando el artículo 14 del CEDH (igualdad) en relación con artículo 8 (vida familiar).

En una laboriosa sentencia, el Tribunal Europeo decide que el criterio de distinción que dio lugar al trato desfavorable no es la nacionalidad sino el estado de inmigración derivado de la condición “control de la inmigración”, y admite que esta circunstancia se incluye en el artículo 14 (demostrando el carácter abierto de esta norma y la interpretación imaginativa que de ella hace el TEDH). Puesto que la circunstancia era predicable del hijo de la solicitante, y no de

ésta, el Tribunal Europeo está adoptando de una manera implícita el concepto de discriminación por otra persona o por asociación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había utilizado en el Caso Coleman (Sentencia de 17.7.2008, C-303/06).

Hechas estas apreciaciones, la Corte desestima la demanda al entender justificado el sistema de prioridades en el acceso a la vivienda social porque atender al estado de inmigración cumple con la necesidad de una gestión equitativa de la limitada oferta de viviendas sociales frente a una mayor demanda. Además, como la autoridad nacional no había dejado sin techo a la solicitante, sino que, dada la falta de prioridad, lo que no se garantizaba era la cercanía de la vivienda al trabajo de la solicitante y a la escuela de su hijo, la restricción no presentó un efecto desproporcionado.

Afirmamos antes que ha sido una ocasión perdida para poner a prueba la Directiva 2004/113/CE. Y ahora nos explicaremos. Creemos que la situación de la solicitante –progenitora monoparental– podría haber sido calificada como fuente de discriminación indirecta por sexo, contraria en consecuencia a la Directiva 2004/113/CE, cuyo ámbito de aplicación incluye el acceso a la vivienda social (artículo 3.1). Sin embargo, los tribunales británicos no acudieron a través de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de donde no sabemos si las razones que llevaron al Tribunal de Estrasburgo a validar la decisión de la autoridad nacional hubieran sido suficientes en el ámbito del Derecho de la Unión Europea. El principio de mainstreaming de género recogido en el artículo 8 del TFUE, tan difícil de asir y tan olvidado en las políticas de la mayoría de los Estados miembros, habría podido ser objeto de serio debate si la cuestión hubiera llegado como prejudicial al Tribunal de Luxemburgo.

* * *

A modo de breve comentario general, se observa una cada vez mayor interrelación entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicando la “ley de Luxemburgo” –es decir el Derecho Comunitario–, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplicando la “ley de Estrasburgo” –es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos–. Y nos gustaría ver cómo resolvería el Tribunal de Luxemburgo muchos de los casos que llegan al Tribunal de Estrasburgo. El progresivo entrelazamiento de la jurisprudencia de ambos Tribunales abre la cuestión a los actores sociales y profesionales de cómo desarrollar una interacción auténticamente fructífera entre las garantías judiciales de los tres instrumentos europeos de derechos humanos: la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.